

rano.—Simon Guzman.—L. Velasquez.—  
M. Zavala.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, 8 de  
Agosto de 1874.—Lic. Emilio Pardo,  
oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito  
del Estado de México por Juan Me-  
na, contra los procedimientos del Ge-  
fe político de Toluca, que habiéndolo  
juzgado como salteador, lo condenó á  
la pena de muerte.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el reo Juan Mena ha interpuesto el recurso de amparo, contra la sentencia pronunciada el día 10 de Abril último por el C. Gefe político de este Distrito, condenándolo á la pena capital, conforme á la ley de 3 de Mayo del año anterior de 1873, por efasalto y robó que sufrieron de ocho rebozos de hilaza, en el paraje nombrado "Cruz Verde", camino que conduce de esta Capital para Calimaya, los CC. Antonio Torres, Luis Gomez y Joaquin Martinez.

Cuando el Juzgado pidió á la autoridad responsable el informe de ley y con la justificación que ella exige, no lo produjo con esta calidad, pues se excusó manifestando que la causa la había remitido al Gobierno del Estado para los efectos del art. 59 de la citada ley de 3 de Mayo; á instancia del Ministerio público se solicitó del mismo Gobierno, copia de la causa que se había formado al expresado Mena; y en ella se notan algunas irregularidades en el procedimiento, y no hay constancia alguna de que la autoridad haya proporcionado al acusado los medios de defensa ni prevención alguna para que produjeran las pruebas que convinieren á sus descargos. Se nota ex-

pecialmente que no existe la justificación del cuerpo del delito, ni que se le haya convencido de que el hubiese sido el autor del robo.

El quejoso ha hecho valer en el juicio la idea de que el proceso que se le formó y que apareció después de muchos días de hallarse preso, siendo quince días con calidad de separación, ha sido suplantado aunque no se justificó de un modo claro y evidente; sin embargo llama mucho la atención las diligencias que á este respecto se practicaron á solicitud del quejoso.

En efecto, por las declaraciones de Tereso García y Mariano Mendieta, fojas 27 y 28, boqueteros de la cárcel, aparece que Juan Mena entró á la prisión un día viernes que corresponde por fecha al 30 de Enero último teniéndolo en un separo por quince días, sin que lo sacaran fuera de la prisión.

El Alcalde de la cárcel, fojas 24, expuso en declaración en forma que se le recibió, que Mena había entrado á la prisión el día 31 del mismo Enero, fecha que es conforme con una nota que se halla al margen del libro de entradas de presos, de cuya nota hay constancias en la foja 25 vuelta.

La Jefatura política comenzó á formar el proceso de Mena el día 30 de Enero ya citado, fecha que conviene con la declaración de los boqueteros, pero la ena no es conforme con la declaración del Alcalde ni con la nota del libro de la alcaldía; y el juicio que sobre el particular puede formar el que habla de este hecho, es que ni el Alcalde ni el libro dicen una verdad, y en el caso los boqueteros son de mejor condición, porque en ellos se debe de presumir mas imparcialidad que la que puede tener el Alcalde, que es empleado subordinado á la autoridad política. Por otra parte, no se puede explicar que haya hecho aquella autoridad con el reo Mena la noche y día del 30 de Enero, no debiendo suponerse que lo haya dado libre, después de que en ese mismo día consta en el testimonio de la causa,

fué acusado por los robados; se mandó reconocer un caballo que encontraron sudado y con señales de haber sido ensillado la mañana de ese día, se examinaron á varias personas citadas por el acusado, en una palabra, quedó casi en concepto de aquella autoridad, aclarado el hecho que constituye la responsabilidad criminal de Mena.

La presunción vehemente que se desprende del modo de procederse contra Juan Mena, de que se le haya suplantado el proceso, dá mérito para dudar de la justificación que toda autoridad debe de ejercer en todos sus actos, principalmente cuando se trata de la vida de un hombre, ó cuando también esté interesada la vindicta pública y la sociedad toda en el castigo del delincuente.

La ley de 3 de Mayo en su art. 3º, no priva á los acusados de asalto y robo del derecho de rendir sus pruebas para sus descargos, concediéndole los medios de defenderse, sin embargo del tiempo tan corto que sufiere para el procedimiento, lo cual está probando que esas garantías no se hallan suspensas aunque sea en otra forma.

Justificado está en los autos, que sin el otorgamiento de estas garantías, la autoridad política de este Distrito con fecha 10 de Abril próximo pasado, sentenció á la pena capital al referido reo Juan Mena, violando así sus garantías mas nobles y sagradas que proceden del derecho natural.

Por otra parte, aparece probado en los autos, que el cuerpo del delito no está justificado, y en el caso, el Gefe político no ha debido ejercer sus atribuciones conferidas por la ley de 3 de Mayo, puesto que ni está acreditado el asalto y robo, ni que el autor de aquel haya sido Mena, viniendo como consecuencia precisa la necesidad de concluir, que la autoridad política de esta ciudad ha sido autoridad incompetente para juzgar á Mena, imponiéndole la pena capital.

Si así fuere, con aquel procedimiento se ha violado el art. 16 de la Constitución ge-

neral, en cuya inteligencia el recurso de amparo procede y debe otorgársele al quejoso.

En esta virtud, el que suscribe, con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, de su ley reglamentaria de 20 de Enero de 1869 y ley de 3 de Mayo de 1873, pide al Juzgado se sirva declarar: que la Justicia de la Union ampára y protege al referido Juan Mena, contra la sentencia pronunciada el 10 de Abril próximo pasado por el C. Gefe político de esta Ciudad, condenándolo á la pena capital por el asalto y robo de unos rebozos de hilaza, que sufrieron los CC. Antonio Torres, Luis Gomez y Joaquin Martinez.

Toluca, Mayo 6 de 1874.—Ceballos.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Toluca, Mayo 14 de 1874.—Visto el recurso de 11 de Abril último, presentado por Juan Mena, en el cual solicita que la Justicia federal lo ampare y proteja contra la providencia dictada por la Gefatura política de este Distrito, por la cual lo condenó á muerte, fundándose el promovente en que por una parte, cometiendo el delito de falsedad, se ha suplantado el proceso formado contra él, el cual se inició mucho tiempo despues de su prision, cuando el C. Ignacio Guadarrama, Gefe político, se puso sobre aviso con motivo de la interposicion del recurso; y por la otra, en que aun suponiendo que el proceso no se resintiera de ese muy sustancial vicio, se han violado en su persona algunas de las garantías concedidas por el pacto fundamental de la República, por cuanto que fué condenado sin que se le hubiese permitido hacer uso del derecho de defensa. Visto el contenido del oficio del 13 del mismo Abril, que en vez de informe justificado remitió la autoridad política que juzgó y condenó á Mena; y visto por último lo pedido por el C. Promotor fiscal de Hacienda tres dias despues, así como la copia certificada del proceso pedida

al Gobierno del Estado á instancia del Ministerio público, y el resultado de la prueba aducida por el interesado. Teniendo en consideracion,

Primero: que si bien es cierto que de las constancias de dicha copia, brota sin violencia alguna la sospecha de que la causa no se formó en su oportunidad, consignando los hechos con estricta sugestion á la verdad, sino que se supuso ó suplantó, cuando se pidió el informe á la autoridad ejecutora del acto reclamado, porque así lo indican el perfecto desacuerdo ó inconformidad en que se encuentran aquellas, en la parte que dice relacion á la detencion de Mena, que fué aprehendido el 30 de Enero último y remitido á la cárcel el dia siguiente, sin que conste en donde pasó la noche; la falta de la copia del auto de prision formal en el archivo de la Alcaldia; la manera rara de hacer constar en el libro la prision formal, no habiéndose practicado lo mismo con las demas partidas de entradas de tantos otros presos; el exámen en grupo y sin protesta de los CC. Ramon Durán, Pedro Ocampo, Pantaleon Dias, Pedro Bernal ó Hilario García, así como de los que fueron víctimas del robo, los que declararon de la misma manera, sin que se les hubiese presentado el reo en rucda de presos sino aisladamente; la falta de los careos, pues todos se suprimieron; la de los cargos que tambien dejaron de hacerse; la de la fecha en el certificado conque concluye la copia, del cual sin embargo de no estar fechado, se deduce que el C. Lic. Jacinto Varon, se presentó antes de que se pronunciara el fallo; y por último, el resultado de las declaraciones de los boqueteros en contraposicion á la del Alcaide, así como la falta de protesta que en las declaraciones que en otra foja, que es la 19, dieron el citado Duran y el C. Luis Muga, mas, el muy largo tiempo que la autoridad tardó en seguir y terminar la causa, el cual nunca fué de quince dias, sino de mas de dos meses; no es menos cierto, que ni todo esto solo prue-

ba concluyentemente la falsedad, ni respecto de ella es competente este Juzgado, para disponer otra cosa que la remision al Juez ordinario del testimonio de lo conducente.

Segundo: que está suficiente demostrada en autos la violacion de las garantías individuales otorgadas por la Constitucion general en sus arts. 16 y 20, toda vez que faltó competencia en el C. Gefe político mencionado, para condenar á Mena, desde el momento en que se convenció de que no podía obtener la prueba legal y bastante para considerarlo autor del asalto dado á los CC. Antonio Torres, Luis Gomez y Joaquin Martinez, pues no debe olvidarse, que la ley de 3 de Mayo solo faculta á los Gefes políticos, para juzgar y castigar á los ladrones; de donde se concluye, que en este caso, por falta de competencia se violó con la sentencia la garantía consignada en el art. 16 citado, y toda vez tambien que habiéndosele obstruido el derecho de nombrar defensor y el recurso consiguiente de que este alegara cuanto estimara conveniente á la mejor defensa del procesado, se violó la garantía otorgada en el art. 20 fraccion 5ª, porque como se infiere muy claramente del texto expreso de la mencionada ley de 3 de Mayo, dicha garantía no está suspensa, supuesto que esta ley la deja viva, cuando previene en su art. 3º que se oiga en defensa al acusado, al cual le concede el derecho de presentar las pruebas y defensas que á su derecho convengan, derecho del cual evidentemente quizo usar Mena, cuando primero expuso que avisaría quien era su defensor y despues manifestó, que nombraba para ese encargo al citado C. Lic. Varon, de cuya posterior escusa debió instruirse al reo para que nombrara á otro, ó renunciase el derecho de hacerlo; y no se hizo, sino que por solo que agitaba y sin saber que ya se iba á pronunciar sentencia, se le condenó; lo alegado por el promovente y el Ministerio público, con todo lo demás que considerar y ver convino.

La Justicia federal en el Estado de México, con fundamento del art. 101 de la Carta fundamental y con apoyo de la ley reglamentaria de 20 de Enero de 1869, declara: que debe amparar y desde luego ampara y protege á Juan Mena, contra la providencia dictada por la Jefatura política de este Distrito, por la que lo condenó á la pena capital, y manda que se haga saber á las partes este fallo; que se expidan las copias de estilo para su publicacion en los periódicos de costumbre y "Semanario Judicial", que á su tiempo se deduzca testimonio de lo conducente á la suplantacion que se arguye, remitiéndose á donde corresponda, y que se eleve este juicio á la Suprema Corte de Justicia, así como el que por prision arbitraria intentó Mena desistiendo á poco.

El C. Lic. Ramón Ortigosa, Juez de Distrito, definitivamente juzgando, así lo sentenció y firmó. Damos fé.—*Ramón Ortigosa.*—A.—*Manuel Otal y Piña.*—A.—*Ignacio Gonzalo.*

Es copia de su original que certifico. Toluca, Mayo 15 de 1874.—*Ramón Ortigosa.*—A.—*Manuel Otal y Piña.*—A.—*Ignacio Gonzalo.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, 21 de Mayo de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por Juan Mena, contra los procedimientos del Gefe político de Toluca, que habiéndolo juzgado como salteador, lo sentenció á la pena capital, aplicándole la ley de 2 de Mayo de 1872, con violación de las garantías consignadas en los artículos 16 y 20 del Pacto federal; visto el informe rendido por la autoridad responsable; las diligencias promovidas por el quejoso; el parecer del Fiscal y la sentencia del Juez de Distrito.

Considerando: que aunque no toca á la

justicia federal hacer declaracion alguna sobre sentencias pronunciadas por jueces competentes, tiene el deber de examinar si en los procedimientos del juicio se han respetado las garantías individuales consignadas en la Constitucion.

Que aunque el presente caso está regido por la ley extraordinaria, de donde deriva su competencia la autoridad política para juzgar á los salteadores, no ha quedado dicha autoridad relevada del atentamiento debido á las garantías que la ley no ha suspendido expresamente, y que están consignadas en el artículo 20 de la Carta fundamental.

Que está probado por las constancias de autos, que en la secuela del proceso instruido á Mena, se han infringido las fracciones 3ª y 5ª del artículo 20 ya citado.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se declara: que es de reformarse y se reforma la sentencia del Juez de Distrito. Primeros: la Justicia de la Union ampara y protege á Juan Mena, contra los procedimientos del Gefe político de Toluca. Segundo: queda el solicitante á disposicion de dicha Jefatura, para que se verifique el cargo con los testigos que hayan depuesto en su contra y para que se le oiga en defensa, conforme á lo prevenido en la citada fraccion 5ª.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que procedan, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto del primer punto y por mayoría respecto del 2º, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los E. U. Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Lamínez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 22 de Junio de 1874.—*Alejo Gomez Eguarte*, oficial segundo.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Puebla por Andrés Avelino, preso en la cárcel pública por disposicion del Gobierno del Estado, como cómplice del plagio de que se acusó á Manuel Durán y Piña.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el preso Andres Avelino, contra el Superior Gobierno del Estado que lo tiene detenido en la cárcel pública de esta Ciudad, supuesto su estado que es el de alegar, ante V. dicar que del último informe rendido por la autoridad responsable, aparece, que el quejoso aunque consignado al C. Juez de Zilaenyoapan, existe preso en la cárcel desde mucho tiempo há, sin que se le haya tomado su declaración preparatoria, ni decretado su formal prision por el Juez que vá á conocer de los delitos de que está acusado.

Este hecho comprobado debidamente con solo la permanencia del reo en esta poblacion, y aún con lo que expone el Superior Gobierno en sus dos comunicaciones, que se registran en el expediente, demuestra con claridad: que en perjuicio de Avelino se han violado las garantías individuales que le otorgan los artículos 16, 19 y 20 de la Constitucion general, supuesto que se le ha estado molestando en su persona con un encierro de mas de cuatro años, sin mandamiento escrito de autoridad competente que haya fundado la causa legal de tal procedimiento; que su detencion ha excedido del término de tres dias, sin que se haya justificado con un auto motivado de prision, y

que han transcurrido las cuarenta y ocho horas que señala la fraccion 2ª del artículo 20 constitucional, sin que se lo haya tomado su declaración preparatoria, que deben contarse desde el momento en que se puso á disposicion del Juez que llamaba la ley para que conociera de su causa.

Por lo expuesto, el suscrito cree que el amparo de que se trata procedo, y debe concedérsele á Andrés Avelino, con el objeto de que se ponga en libertad.

Sírvase V. C. Juez así decretarlo, con fundamento del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.—*W. Sanchez*.

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Puebla, 13 de Mayo de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Andres Avelino, con motivo de hallarse preso en la cárcel pública, por disposicion del Superior Gobierno del Estado, teniéndosele por cómplice en el plagio que se atribuyó á D. Manuel Durán y Piña cometido en las personas de los CC. Miguel García Veyran, Pacheco, Mendizábal y otros; el escrito de queja; el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; lo alegado y todo cuanto ha debido verse.

Considerando: que el interesado ha hecho valer para lograr su intento, que lleva mas de cuatro años de preso, por orden del Gobierno del Estado, sin que se le haya consignado á autoridad competente, tomado declaración y declarado bien preso, habiéndose por lo mismo faltado á lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitucion, en perjuicio suyo; alegando además, que el reo principal ha sido amparado, apoyado en la ley de 20 de Enero de 1869.

Que del informe rendido, resulta: que consignados los reos Avelino y Durán á la autoridad judicial, se suscitó competencia negativa entre el Juez de Tepeji y este Juzgado de Distrito, lo cual diera lugar á que se remitiera la causa á la Suprema Corte